

-Crònica-

2.12. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN GALICIA (pp. 2-12)

—

2.12. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A GALÍCIA (pp. 13-23)

J. JOSÉ PERNAS GARCÍA

Profesor contratado doctor de Derecho Administrativo / Professor contractar doctor de

Dret Administratiu

Universidade da Coruña

Sumario: 1. Introducción. 2. Los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal y la competencia urbanística y ambiental municipal. 3. Autorización de planes o proyectos en Red Natura. 4. Invalidez de una licencia de actividad de una instalación que genera inmisiones molestas. 5. Legalidad de las ordenanzas municipales sobre instalaciones de telefonía móvil.

1. Introducción

La presente crónica se centra en el análisis de cuatro sentencias. En primer lugar, la sentencia de 20 de enero de 2010 se pronuncia sobre la legalidad de un acto administrativo de aprobación de un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, en concreto la ampliación de una papelera en la ría de Pontevedra. La cuestión se centra en la aplicación del Decreto autonómico 80/2000, do 23 de marzo, que anula la capacidad de intervención administrativa de los municipios en relación con este tipo de proyectos. Seguidamente, la sentencia del TSJ de Galicia de 23 de diciembre de 2009 resuelve un recurso dirigido contra una resolución autonómica de autorización de un parque eólico situado en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), fundamentado en el supuesto incumplimiento de las previsiones de la “normativa hábitats”. A continuación, veremos una sentencia de esa misma fecha que decide sobre la legalidad de una licencia municipal de actividad de una instalación, cuyas emisiones afectaban de forma considerable a los inquilinos de una vivienda colindante y previa a la autorización de dicha instalación. Finalmente, la sentencia de 3 de diciembre de 2009 resuelve sobre la legalidad de una ordenanza municipal para la instalación de antenas de telefonía móvil y, en consecuencia, sobre la competencia municipal en este ámbito.

2. Los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal y la competencia urbanística y ambiental municipal

La sentencia de 20 de enero de 2010 (sección 1ª, ponente: Javier Cambón García) resuelve un litigio sobre la validez de la resolución del *Consello da Xunta de Galicia*, de 26 de diciembre de 2003, sobre la aprobación definitiva del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de utilidad pública e interés social de un proyecto de la empresa ENCE. Este proyecto se refiere a la ampliación de la papelera de esta empresa —consistente fundamentalmente en la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación de tratamiento de vertidos y de una fábrica de producción de papel tisú— situada en la Ría de Pontevedra, la cual ha planteado a lo largo de los años un grado considerable de confrontación política y no poca contestación social. El recurso fue

planteado por el Ayuntamiento de Pontevedra y fue desestimado por las razones que vamos a comentar a continuación.

Las cuestiones planteadas en este recurso fueron resueltas por el Tribunal en dos sentencias previas del TSJ de Galicia —572/08 y 153/09— en las que ya se analizaba la legalidad de dicho acuerdo, con motivo de sendos recursos planteados por dos asociaciones de protección de la ría. En el mismo sentido que estas dos sentencias, el TSJ de Galicia desestima los motivos de impugnación del Ayuntamiento de Pontevedra, referidos fundamentalmente a la aplicación del Decreto 80/2000, do 23 de marzo, por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. Esta norma exime a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal de la necesidad de disponer de licencias urbanísticas y del resto de actos de intervención municipal, así como obliga a la modificación de la planificación urbanística municipal para garantizar el desarrollo de aquellos.

El Tribunal se limita a repetir los fundamentos jurídicos de las citadas sentencias, sin realizar argumentos complementarios. Pese a ello, debido a la trascendencia social de este asunto, consideramos pertinente recordar los argumentos jurídicos fundamentales del Tribunal.

El Tribunal reitera los argumentos de su sentencia 572/08, de septiembre de 2008 (F. 2º). En primer lugar, sobre el no sometimiento a información pública del estudio de impacto ambiental, el Tribunal señala que “ningún precepto [del Decreto 80/2000, do 23 de marzo] (...) exige el traslado independiente del EIA para alegaciones”. En segundo lugar, el Tribunal entiende justificada la declaración de supramunicipalidad sobre la base de los beneficios ambientales (la reducción de la contaminación de la ría derivada de la instalación de tratamiento de efluentes o el compromiso de inversión de la empresa en proyectos ambientales en el entorno) y socio-económicos derivados del proyecto (tráfico portuario de mercancías o creación de puestos de trabajo). En tercer lugar, El TSJ de Galicia resuelve que el proyecto está exento de la exigencia de licencias municipales urbanísticas o ambientales, al considerar que la planta de tratamiento de efluentes tiene el carácter de obra hidráulica, sobre la base de la Disposición Adicional 2ª de la ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración hidráulica de Galicia. Respecto al resto del proyecto propuesto (fábrica de papel tisú), entiende que “no cabe la sumisión a licencia municipal urbanística de las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto sectorial antes de que el planeamiento haya sido adaptado

a sus determinaciones, pues si se estableciera dicha exigencia quedaría desactivada la primacía de aquel instrumento de ordenación del territorio”. Pese a que el Decreto 80/2000 extiende dicha exención únicamente a las obras de carácter público, el Tribunal realiza una interpretación amplia del concepto de obras públicas, incluyendo no sólo las que sean de iniciativa pública, sino también las que tengan una “finalidad pública de relevancia para el interés general, como es el saneamiento integral de la ría de Pontevedra”.

El Tribunal recoge también los fundamentos jurídicos de su sentencia 153/09, de 25 de febrero de 2009 (F. 3º)¹, que reitera algunos de los argumentos de la sentencia 572/08. Vamos a centrarnos por tanto en los aspectos peculiares de aquella. En primer lugar, el visado colegial no es exigible a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, sólo es preciso para los proyectos necesarios para el otorgamiento de licencias, “lo que evidentemente no es el caso cuando se está en presencia de un instrumento de planeamiento o de ordenación territorial”.

En segundo lugar, con relación a la declaración de incidencia supramunicipal, el Tribunal afirma que estaba justificada “(...) a la vista de que la mejor depuración de las aguas afectaba a la ría de Pontevedra debido a que la planta de tratamiento de efluentes está al servicio del saneamiento integran de dicha ría, y de los efectos beneficiosos que representa desde el punto de vista medioambiental”. También añade a este argumento los beneficios socio-económicos derivados, por ejemplo, del tránsito portuario de mercancías, de la creación de puestos de trabajo o del valor añadido del producto producido tras la ampliación, así como el compromiso de la empresa de financiar proyectos de carácter ambiental en el entorno. El Tribunal considera en definitiva acreditados los motivos que justifican la declaración de supramunicipalidad del proyecto sectorial presentado por ENCE y “los efectos beneficiosos para el desarrollo sostenible de Galicia”.

En tercer lugar, se plantea que el proyecto no cuenta con los títulos habilitantes exigidos por la Ley de costas. Sobre este particular el Tribunal afirma que es preciso distinguir dos fases diferenciadas. “La primera, relativa a la tramitación y aprobación del instrumento y, una segunda, de ejecución de las obras que requiera la efectiva

¹ Sobre esta sentencia véase también NOGUEIRA LÓPEZ, A., SANZ LARRUGA, J., “Galicia: políticas pendulares en ámbitos sensibles por los cambios de gobierno”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.), “Observatorio de Políticas Ambientales 2010”, Aranzadi, 2010 (en prensa).

implantación de las infraestructuras, instalaciones y dotaciones contempladas en el proyecto sectorial”. “Sin duda, tales fases implican tres distintos ramos de actividad administrativa que se cuestionan por la recurrente, como son, la urbanística, medioambiental y de protección del dominio público marítimo terrestre, cuya titularidad corresponde a distintas Administraciones Territoriales, que no confluyen sino que discurren paralelas, quedando limitada la primera fase al ejercicio por la Comunidad Autónoma del control preventivo en materia urbanística y cuya regulación, insistimos, se contiene en la Ley 10/1995 y Decreto 80/2000”. En este procedimiento inicial de aprobación del proyecto sectorial supramunicipal no consta que sea preciso presentar resolución de otorgamiento de los títulos habilitantes de la Ley de costas por parte de Administración general del Estado. La concesión administrativa de uso privativo de dominio público ha de ser tramitada en la fase de ejecución de las obras e instalaciones contempladas en el proyecto sectorial, con posterioridad precisamente a la aprobación del instrumento de ordenación territorial, es decir, del propio proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Así, a juicio del Tribunal, no es una cuestión que deba ser objeto del recurso ya que se refiere a un momento posterior, el de la ejecución del proyecto.

En cuarto lugar, las partes demandantes alegan la vulneración de la autonomía constitucional reconocida a los entes locales. Sobre esta cuestión se plantea el incumplimiento de las previsiones de la Ley 10/1995 de ordenación del territorio de Galicia (Disposición Adicional 1ª), que exime de licencia urbanística municipal únicamente a las “obras promovidas directamente por la Administración pública o sus organismo autónomos”, no por tanto a las obras de carácter privado. El Tribunal desestima este argumento en el mismo sentido que la sentencia 572/08, al entender que la planta de tratamiento de efluentes tiene el carácter de obra hidráulica y, con relación al resto del proyecto, que el instrumento de ordenación territorial autonómica prima sobre la intervención municipal. Asimismo realiza una interpretación amplia de la denominación “obra pública”, en el mismo sentido que la sentencia 572/08.

3. Autorización de planes o proyectos en Red Natura

La sentencia del TSJ de Galicia de 23 de diciembre de 2009 (sección 3ª, ponente: Julio Cibeira Yebra Pimentel) resuelve un recurso contencioso-administrativo contra una

resolución de la *Consellería de Innovación e Industria* por el que se aprueba un proyecto de parque eólico situado en el LIC “Brañas de Xestoso”. Este recurso fue desestimado.

El pronunciamiento interpreta el artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres². El TSJ de Galicia entiende que el art. 6.4 de la Directiva de hábitats solo desplegará sus efectos limitativos de obras o proyectos en Lugares de Interés Comunitario cuando haya conclusiones negativas de la evaluación ambiental de las repercusiones sobre esa clase de lugar protegido y no haya una solución alternativa, incluso en aquellos casos en que tal espacio albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie protegida (FS. 4º y 5º). A juicio del Tribunal esta conclusión es la que mejor se adapta al Documento orientativo sobre el artículo 6.4 de la Directiva sobre hábitats publicado por la Comisión en el año 2000, que apunta que la evaluación preliminar de los efectos de un plan o programa sobre un espacio determinado, “(...) permite a las autoridades competentes extraer conclusiones sobre las consecuencias del proyecto en la integridad del lugar, y si dichas conclusiones son positivas, es decir, si existe un elevado grado de certeza científica de que la iniciativa no va a afectar al lugar, las autoridades competentes pueden autorizar el plan o proyecto, y solo en caso de duda, o si las conclusiones son negativas, debe aplicarse el principio de cautela y seguirse los procedimientos descritos en el apartado 4 del artículo 6, con la posibilidad de que el plan pueda suspenderse en aplicación del principio de cautela y de planteamientos preventivos” (F. 5º).

El Tribunal resuelve que la evaluación ambiental realizada, que tuvo como resultado la emisión de una declaración de impacto ambiental favorable, fue adecuada. A juicio del

² Artículo 6.4 de la Directiva 92/43:

“4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden”.

Tribunal, tras las condiciones ambientales impuestas al proyecto no consta que las “(...) condiciones medioambientales del mismo hayan quedado comprometidas, afectadas o degradadas con el proyecto de obra de que se trata” (F. 5º). Por tanto, considera que el acto de autorización del proyecto no presenta vicio de legalidad por incumplimiento de las previsiones legales de protección de la Red Natura.

4. Invalidez de una licencia de actividad de una instalación que genera inmisiones molestas

La sentencia del TSJ de Galicia de 23 de diciembre de 2009 (sección 2ª, ponente: Carlos Pérez Keller) se pronuncia sobre la legalidad de una licencia de actividad de un taller de fibra de vidrio otorgada en el año 1997. La actividad se encontraba a escasos metros de una vivienda, cuyos inquilinos se veían afectados por considerables molestias de ruidos, contaminación atmosférica y olores. El Tribunal anula la licencia y condena al Ayuntamiento de Abegondo (Coruña) a indemnizar a los demandantes por razón de los daños y perjuicios causados.

Las Normas Subsidiarias aplicables al caso permiten los usos industriales compatibles con la vivienda en el suelo no urbanizable de núcleo rural. Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Coruña, de 14 de mayo de 1991, permiten los usos industriales en este tipo de suelo pero con la condición de que la distancia a viviendas exteriores se fija en cincuenta metros, que en el presente caso no se cumple, pues la vivienda del recurrente está a unos treinta y seis metros. La vivienda era previa a la solicitud de la puesta en funcionamiento de la actividad litigiosa. El Tribunal afirma, en este orden de cosas, que “(...) esta “circunstancia ha de tenerse en cuenta a la hora de validar ulteriores solicitudes que pudieran entrar en colisión con ella” (F. 3º). El Tribunal afirma que “podría, no obstante, pensarse que desde el momento en que las NN.SS. municipales no establecen distancia mínima a viviendas, este parámetro se deja a la aplicación ponderada caso por caso por parte de la Administración actuante, en función naturalmente de que la actividad sea compatible con vivienda, que es el referente plasmado en ellas; ello obliga a hacer un recorrido por las inspecciones efectuadas a la nave” (F. 4º).

El proceso productivo se llevaba a cabo en el interior de la nave pero con puertas y ventanas abiertas durante la jornada laboral para permitir la circulación de aire y el más

rápido secado de las piezas. Esto originaba pequeñas partículas y polvo de fibra de vidrio y provocaba fuertes olores a disolvente o pintura que se detectaban en el exterior e incluso en interior de la vivienda del demandante. La *Consellería de Medio Ambiente* constató que la empresa carecía de medidas correctoras alguna para impedir la emisión de olores y polvo al exterior, pero al mismo tiempo informó de la necesidad de que trabajos de esta índole se realizaran en recintos ventilados para impedir las concentraciones perniciosas en el interior no solo para la salud de los trabajadores sino también para evitar riesgos de explosiones. “En realidad la actividad —apunta el Tribunal— parece encontrarse en un grave aprieto: por una parte ha de aislarse del exterior para preservar la inmunidad del uso de vivienda con el que es compatible; pero por otro, se ha de trabajar con puertas y ventanas abiertas para evitar situaciones de riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores” (F. 5º).

El Tribunal dispone “(...) que no es que haya abuso en la actividad por exceso en su ejercicio en relación a lo autorizado, sino que la propia licencia ha de entenderse viciada: se ha comprobado la insuficiencia de las medidas correctoras y no es que sean desviaciones de lo permitido en aquélla (...)”. Concluye que la actividad presenta carencias de medidas para controlar las emisiones de olores, partículas e, incluso, de ruidos, “si bien de éstos se dice que no sobrepasarán lo establecido en la NBE-CA88 y en las Ordenanzas municipales” (F. 5º).

El TSJ de Galicia concluye que “la actividad objeto de la licencia en los términos en que ha sido autorizada ha de reputarse incompatible con vivienda, por lo cual, aún en el discutible supuesto de que no fuera aplicable la distancia establecida en las NN.CC.SS. provinciales, no podría entenderse acorde con las propias del municipio; parece que no habrá otro remedio que presentar otro proyecto que permita cohonstar por un lado la compatibilidad con el uso de vivienda, y por otro salvaguardar la seguridad interior de la nave; o en otro caso buscar otro emplazamiento que permita e[l] ejercicio de la actividad sin cortapisas urbanísticas” (F. 6º).

Con relación a la solicitud de daños y perjuicios que realiza la parte demandante, el Tribunal resuelve lo siguiente:

“En orden a la traducción pecuniaria de los perjuicios indemnizables, es de significar que el montante económico en que se pueda ponderar el arrendamiento de otra vivienda no es un factor decisivo a la hora de calcular las indemnizaciones procedentes por inmisiones en la vivienda propia, máxime si lo

que se pretende es acudir a los precios de mercado de una similar a la ocupada por los perjudicados, con el resultado de que ese importe variará en función de la calidad y tamaño de tal vivienda siendo así que las molestias, que es verdaderamente lo que hay en lo posible que reparar, son idénticas en caso de sufrirlas en una vivienda lujosa o en otra más modesta, ello aparte de que el informe aportado de una agencia inmobiliaria (...) no ofrece credibilidad suficiente al limitarse a consignar unas cifras sin mayor motivación ni indicación de las fuentes consultadas. El criterio del alquiler podría adquirir relevancia, siempre en combinación con otros factores, cuando el perjudicado y su familia se hubieran visto obligados ante la gravedad de las agresiones a optar por ello, lo que no es el caso, en el que se ha de seguir la regla general de que lo indemnizable son las molestias sufridas en la residencia propia por las inmisiones acústicas y olfativas que a ella llegaron a consecuencia de la inmediatez de la industria; en estas condiciones se trata de entidades inconmensurables y de difícil motivación en términos objetivos; no obstante, teniendo en cuenta la duración de las molestias, y una apreciación ponderada de sus intensidades y tiempos de emisión, parece que la cifra de diez mil euros resulta más adecuada que la establecida en la instancia, bien entendido que esa cantidad corresponde al tiempo transcurrido hasta el presente mes de diciembre inclusive, y que en lo sucesivo y hasta la finalización efectiva de las inmisiones se establece en doscientos cincuenta euros mensuales”.

5. Legalidad de las ordenanzas municipales sobre instalaciones de telefonía móvil

La sentencia de 3 de diciembre de 2009 (sección 2ª, ponente: José María Arrojo Martínez) resuelve un recurso contencioso-administrativo planteado por Telefónica Móviles contra la aprobación de la Ordenanza municipal para la instalación y funcionamiento de las instalaciones de telefonía móvil personal y otros servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Valga. El Tribunal estima parcialmente la demanda anulando algunos artículos de la referida ordenanza.

La jurisprudencia de los TSJ de las diferentes CCAA acoge planteamientos jurídicos bien diferentes sobre la legalidad de las ordenanzas municipales para la instalación de las instalaciones de telefonía móvil y, en consecuencia, sobre la competencia de los entes locales en este ámbito. Como muestra de esta diversidad, mencionamos la

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 29 de diciembre de 2008³, cuya decisión y fundamentación jurídica contrasta con la sentencia que estamos analizando.

El Tribunal menciona la doctrina del Tribunal Supremo (fundamentalmente la sentencia de 15 de diciembre de 2003) para recordar que los Ayuntamientos tienen competencia para establecer condiciones técnicas y jurídicas para este tipo de instalaciones, con la finalidad de “(...) evitar la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse” (F. 2º). No obstante, la jurisprudencia del Supremo señala que la competencia municipal “(...) no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones” (F. 2º).

Tras la referencia previa a la jurisprudencia del Supremo, el propio TSJ se manifiesta sobre la competencia municipal en esta ámbito: “Nada se puede cuestionar a la voluntad expresada de compatibilizar la funcionalidad de los elementos y equipos que requiere la instalación de un servicio de calidad con la preservación del paisaje urbano y natural, minimizando la ocupación y el impacto de su implantación. La protección del paisaje y la minimización del impacto visual encuentra su apoyo en la legislación medioambiental y urbanística, que constituye una materia estrechamente relacionada con la protección de los intereses municipales. En la medida que responde a esa voluntad de compatibilizar la calidad del servicio con la preservación del paisaje urbano y natural, tampoco merece crítica alguna” (F. 2º). El Tribunal concluye que “(...) parece fuera de toda duda que por razones urbanísticas, medioambientales, paisajísticas o histórico-patrimoniales, los Ayuntamientos pueden establecer restricciones en orden al establecimiento de las instalaciones de telefonía móvil” (F. 4º).

El Tribunal se pronuncia sobre diversas tachas de legalidad planteadas por la parte demandante. En primer lugar, el Tribunal (por remisión nuevamente a la jurisprudencia del Supremo) no aprecia incorrección en la exigencia de la ordenanza de previa aprobación de un plan de implantación para estas actividades, al considerar que se produce “(...) una adecuada compatibilización entre las razones urbanísticas, medioambientales y paisajísticas y las necesidades de las operadoras”.

³ Véase, nota jurisprudencial de PERNAS GARCÍA, J. en *Actualidad Jurídica Ambiental* de 2 de abril de 2009, www.actualidadjuridicaambiental.com.

En segundo término, tampoco encuentra vicio de invalidez en la obligación de que los operadores utilicen la mejor tecnología disponible que sea compatible con la minimización del impacto visual y medioambiental (F. 3º). Asimismo, y en tercer lugar, considera adecuadas las previsiones sobre las condiciones de uso compartido de infraestructuras por parte de diferentes operadores, al entenderlas justificadas “por razones urbanísticas, medioambientales o paisajísticas” (F. 6º). “Téngase en cuenta — sigue diciendo el Tribunal— que procede que las Administraciones públicas fomenten la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, y que la aplicación del artículo 14 exigiría la necesaria motivación y justificación del caso concreto que se examine”.

En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional analiza la exigencia de licencia urbanísticas y de actividades clasificadas. La primera queda justificada por las previsiones de la normativa de disciplina urbanística de Galicia. Por otra parte, la consideración de las instalaciones de telefonía móvil como actividad clasificada “(...) corresponde a su naturaleza potencialmente peligrosa”. El Tribunal justifica esta apreciación en la propia Exposición del motivos del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. El Tribunal resuelve esta cuestión con bastante sentido común, sin entrar, como podemos ver en otras sentencias sobre esta cuestión, en la compleja cuestión sobre la existencia de indicios científicos sobre los efectos sanitarios y ambientales de estas actividades.

En quinto lugar, no plantea problemas para el Tribunal la obligación de revisión de instalaciones previstas en la ordenanza. A su juicio ello “(...) conecta con la lógica exigencia, dentro de lo posible, de compatibilidad con el entorno por razones urbanísticas y medio ambientales (...)”. “[N]o parece que constituya exceso normativo alguno” (F. 8º).

En sexto término, “[l]a exigencia sobre acreditación de la concurrencia de las condiciones establecidas precisamente en la normativa sectorial, con el debido carácter de constatación funcional y de mantenimiento de dicha concurrencia y de su operatividad, no se presenta contraria a Derecho considerando el interés vinculado al ámbito competencial propio de la entidad local, interés que a su vez justifica la

previsión de la disposición adicional sobre creación de registro municipal no advirtiéndose al respecto perjuicio alguno para la parte ni perturbación de competencias de otras Administraciones” (F. 9º).

Finalmente, el Tribunal considera válida la fijación de una tasa municipal por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal, “(...) sin que pueda confundirse el dominio público Radioeléctrico con el dominio público municipal” (F. 10º).

No obstante, el Tribunal entiende que la ordenanza no puede establecer prohibiciones o distancias adicionales de protección por exclusivas razones de salud. Citando una sentencia previa del propio TSJ de Galicia (sentencia 4708/2002, de 26 de mayo de 2005), afirma que “[L]os Ayuntamientos pueden exigir, en ejercicio de sus competencias en materia de salud, que se cumplan los requisitos determinados en esta normativa [la regulación estatal que establece condiciones sanitarias a estas instalaciones⁴], pero no establecer ellos esos requisitos” (F. 4º). El Tribunal anula el anexo de la ordenanza que establecía estos requisitos y condiciones técnicas. El TSJ de Galicia también anula las disposiciones de la ordenanza referidas a la exigencia de un seguro de responsabilidad civil (F. 5º) y a la exigencia de responsabilidad solidaria en materia sancionadora (F. 11º).

⁴ Concretamente el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Sumari: 1. Introducció. 2. Els projectes sectorials d'incidència supramunicipal i la competència urbanística i ambiental municipal. 3. Autorització de plans i projectes a la Xarxa Natura. 4. Invalidesa d'una llicència d'activitat d'una instal·lació que genera immissions molestes. 5. Legalitat de les ordenances municipals sobre instal·lacions de telefonia mòbil.

1. Introducció

La crònica present es centra en l'anàlisi de quatre sentències. En primer lloc, la sentència de 20 de gener de 2010 es pronuncia sobre la legalitat d'un acte administratiu d'aprovació d'un projecte sectorial d'incidència supramunicipal, en concret, l'ampliació d'una paperera a la Ría de Pontevedra. La qüestió es centra en l'aplicació del Decret autonòmic 80/2000, de 23 de març, que anul·la la capacitat d'intervenció administrativa dels municipis en relació amb aquest tipus de projectes. Seguidament, la sentència del TSJ de Galícia de 23 de desembre de 2009 resol un recurs dirigit contra una resolució autonòmica d'autorització d'un parc edíl·lic situat en un Lloc d'Interès Comunitari (LIC), fonamentat en el suposat incompliment de les previsions de la "Normativa hàbitats". A continuació, veurem una sentència de la mateixa data que decideix sobre la legalitat d'una llicència municipal d'activitat d'una instal·lació, les emissions de la qual afectaven de manera considerable als inquilins d'un habitatge confrontant i prèvia a l'autorització de la instal·lació esmentada. Finalment, la sentència de 3 de desembre de 2009 resol sobre la legalitat d'una ordenança municipal per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil i, en conseqüència, sobre la competència municipal en aquest àmbit.

2. Els projectes sectorials d'incidència supramunicipal i la competència urbanística i ambiental municipal

La sentència de 20 de gener de 2010 (secció 1a., ponent: Javier Cambón García) resol un litigi sobre la validesa de la resolució del *Consello da Xunta de Galicia*, de 26 de desembre de 2003, sobre l'aprovació definitiva del projecte sectorial d'incidència supramunicipal d'utilitat pública i interès social d'un projecte de l'empresa ENCE. Aquest projecte es refereix a l'ampliació de la paperera d'aquesta empresa —consistent fonamentalment en la construcció i posada en funcionament d'una instal·lació de tractament d'abocaments i d'una fàbrica de producció de paper tissú— situada a la Ría de Pontevedra, la qual ha plantejat al llarg de dos anys un grau considerable de confrontació política i no poca contestació social. El recurs va ser plantejat per l'Ajuntament de Pontevedra i va ser desestimat per les raons que ara comentarem.

Les qüestions plantejades en aquest recurs van ser resoltes pel Tribunal en dues sentències prèvies del TSJ de Galícia —572/08 i 153/09— en les que ja s'analitzava la legalitat d'aquest acord, amb motiu de sengles recursos plantejats per dues associacions de protecció de la Ría. En el mateix sentit que aquestes dues sentències, el TSJ de Galícia desestima els motius d'impugnació de l'Ajuntament de Pontevedra, referits fonamentalment a l'aplicació del Decret 80/2000, de 23 de març, pel que es regulen els plans i projectes sectorials d'incidència supramunicipal. Aquesta norma eximeix als projectes sectorials de incidència supramunicipal de la necessitat de disposar de llicències urbanístiques i de la resta d'actes d'intervenció municipal, així com obliga a la modificació de la planificació urbanística municipal per garantir el seu desenvolupament.

El Tribunal es limita a repetir els fonaments jurídics de les esmentades sentències, sense realitzar arguments complementaris. Malgrat això, com a conseqüència de la transcendència social d'aquest afer, considerem pertinent recordar els arguments jurídics fonamentals del Tribunal.

El Tribunal reitera els arguments de la seva sentència 572/08, de setembre de 2008 (F. 2n.). En primer lloc, sobre el no sotmetiment a informació pública de l'estudi d'impacte ambiental el Tribunal assenyala que “*ningún precepto* [del Decret 80/2000, de 23 de març] (...) *exige el traslado independiente del EIA para alegaciones*”. En segon lloc, el Tribunal entén justificada la declaració de supramunicipalitat sobre la base dels beneficis ambientals (la reducció de la contaminació de la Ría derivada de la instal·lació de tractament d'efluents o el compromís d'inversió de l'empresa en projectes ambientals en l'entorn) i socioeconòmics derivats del projecte (tràfic portuari de mercaderies o creació de llocs de treball). En tercer lloc, el TSJ de Galícia resol que el projecte està exempt de l'exigència de llicències municipals urbanístiques o ambientals, en considerar que la planta de tractament d'efluent té el caràcter d'obra hidràulica, sobre la base de la Disposició Addicional Segona de la Llei 8/1993, de 23 de juny, reguladora de l'Administració hidràulica de Galícia. Respecte de la resta del projecte proposat (fàbrica de paper tissú), entén que “*no cabe la sumisión a licencia municipal urbanística de las obras e instalaciones comprendidas en el proyecto sectorial antes de que el planeamiento haya sido adaptado a sus determinaciones, pues si se estableciera dicha exigencia quedaría desactivada la primacía de aquel instrumento de ordenación del territorio*”. Malgrat que el Decret 80/2000 estén aquesta exempció únicament a les

obres de caràcter públic, el Tribunal realitza una interpretació àmplia del concepte d'obres públiques, tot incloent no només les que siguin d'iniciativa pública, sinó també les que tinguin una *“finalidad pública de relevancia para el interés general, como es el saneamiento integral de la ría de Pontevedra”*.

El Tribunal recull també els fonaments jurídics de la seva sentència 153/09, de 25 de febrer de 2009 (F. 3r.)⁵, que reitera alguns dels arguments de la sentència 572/08. Ens centrarem, per tant, en els aspectes peculiars de la primera. En primer lloc, el visat col·legial no és exigible als projectes sectorials d'incidència supramunicipal, només és obligatori per als projectes necessaris per a l'atorgament de llicències, la qual cosa, segons el Tribunal, no és el cas quan s'està en presència d'un instrument de planejament o d'ordenació territorial.

En segon lloc, amb relació a la declaració d'incidència supramunicipal, el Tribunal afirma que estava justificada *“(…) a la vista de que la mejor depuración de las aguas afectaba a la ría de Pontevedra debido a que la planta de tratamiento de efluentes está al servicio del saneamiento integran de dicha ría, y de los efectos beneficiosos que representa desde el punto de vista medioambiental”*. També afegeix a aquest argument els beneficis socioeconòmics derivats, per exemple, del trànsit portuari de mercaderies, de la creació de llocs de treball o del valor afegit del producte produït després de l'ampliació, així com el compromís de l'empresa de finançar projectes de caràcter ambiental en l'entorn. El Tribunal considera, en definitiva, acreditats els motius que justifiquen la declaració de supramunicipalitat del projecte sectorial presentat per ENCE i les efectes beneficiosos per al *“desarrollo sostenible de Galicia”*.

En tercer lloc, es planteja que el projecte no compte amb els títols habilitants exigits per la Llei de Costes. Sobre aquest punt, el Tribunal afirma que és precís distingir dues fases diferenciades. *“La primera, relativa a la tramitación y aprobación del instrumento y, una segunda, de ejecución de las obras que requiera la efectiva implantación de las infraestructuras, instalaciones y dotaciones contempladas en el proyecto sectorial”*. Aquestes fases, impliquen, d'acord amb el Tribunal tres branques de l'activitat administrativa diferents, que es qüestions pels recorrents, com són la urbanística, l'ambiental i la de protecció del domini públic marítimoterrestre, la titularitat de les

⁵ Sobre aquesta sentència, vegeu també NOGUEIRA LÓPEZ, A., SANZ LARRUGA, J., “Galicia: políticas pendulares en ámbitos sensibles por los cambios de gobierno”, López Ramón, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2010*, Aranzadi, 2010 (en prensa).

quals correspon a diferents administracions territorials, que no conflueixen, sinó que discorren paral·leles, restant limitada la primera fase al exercici per la Comunitat Autònoma del control preventiu en matèria urbanística, la regulació de la qual es conté en la Llei 10/1995 i el Decret 80/2000. En aquest procediment inicial d'aprovació del projecte sectorial supramunicipal no consta que sigui precís presentar resolució d'atorgament dels títols habilitants de la Llei de Costes per part de l'Administració general de l'Estat. La concessió administrativa d'ús privatiu de domini públic ha de ser tramitada en la fase d'execució de les obres i instal·lacions contemplades en el projecte sectorial, amb posterioritat precisament a l'aprovació de l'instrument d'ordenació territorial, és a dir, del mateix projecte sectorial d'incidència supramunicipal. Així, segons el criteri del Tribunal, no és una qüestió que hagi de ser objecte del recurs, ja que es refereix a un moment posterior, el de l'execució del projecte.

En quart lloc, les parts demandants al·leguen la vulneració de l'autonomia constitucional reconeguda als ens locals. Sobre aquesta qüestió es planteja l'incompliment de les previsions de la Llei 10/1995, d'ordenació del territori de Galícia (Disposició Addicional Primera), que exigeix de llicència urbanística municipal únicament a les "*obras promovidas directamente por la Administración pública o sus organismo autónomos*", no, per tant, a les de caràcter privat. El Tribunal desestima aquest argument en el mateix sentit que la sentència 572/08, tot entenent que la planta de tractament d'efluents té caràcter d'obra hidràulica i, amb relació a la resta del projecte, que l'instrument d'ordenació territorial autonòmic prima sobre la intervenció municipal. Així mateix, realitza una interpretació àmplia de la denominació 'obra pública, en el mateix sentit que la sentència 572/08.

3. Autorització de plans i projectes a la Xarxa Natura

La sentència del TSJ de Galícia de 23 de desembre de 2009 (secció 3a., ponent: Julio Cibeira Yebra Pimentel) resol un recurs contenciós administratiu contra una resolució de la *Consellería de Innovación e Industria* per la que s'aprova un projecte de parc edòlic situat en el LIC Brañas de Xestoso. Aquest recurs va ser desestimat.

El pronunciament interpreta l'article 6.4 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de

1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres⁶. El TSJ de Galícia entén que l'article 6.4 de la Directiva d'hàbitats només desplegarà els seus efectes limitatius d'obres i projectes en Llocs d'Interès Comunitari quan hagi conclusions negatives de l'avaluació d'impacte ambiental de les repercussions sobre aquesta classe de lloc protegit, i no hi hagi una solució alternativa, fins i tot en aquells casos en què l'espai concernit albergui un tipus d'hàbitat natural i/o espècie protegida prioritari (FS. 4t. i 5è). Segons el Tribunal, aquesta conclusió és la que millor s'adapta al Document orientatiu sobre l'article 6.4 de la Directiva sobre hàbitats publicat per la Comissió l'any 2000, que apunta que l'avaluació preliminar dels efectes d'un pla o programa sobre un espai determinat permet a les autoritat competents extraure conclusions sobre les conseqüències del projecte en la integritat del lloc, i si aquestes conclusions són positives, és a dir, si existeix un grau elevat de certesa científica de què la iniciativa no afectarà al lloc, les autoritats competents poden autoritzar el pla o projecte i, només en cas de dubte o si les conclusions són negatives, ha d'aplicar-se el principi de cautela i seguir els procediments descrits en l'apartat 4 de l'article 6, amb la possibilitat de què el pla es pugui suspendre en aplicació del principi de cautela i de plantejaments preventius (F. 5è).

El Tribunal resol que l'avaluació ambiental realitzada, que va tenir com a resultat l'emissió d'una declaració d'impacte ambiental favorable, va ser adequada. Segons el criteri del Tribunal, rere les condicions ambientals imposades al projecte no consta que les “(...) *condiciones medioambientales del mismo hayan quedado comprometidas, afectadas o degradadas con el proyecto de obra de que se trata*” (F. 5è). Per tant, considera que l'acte d'autorització del projecte no presenta cap vici de legalitat per incompliment de les previsions legals de protecció de la Xarxa Natura.

⁶ Article 6.4 de la Directiva 92/43:

“4. Si, malgrat les conclusions negatives de l'avaluació de les repercussions sobre el lloc i a manca de sol·licituds alternatives, hagués de realitzar-se un pla o projecte per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloses raons d'índole social o econòmica, l'Estat membre ha de prendre les mesures compensatòries que siguin necessàries per garantir que la coherència global de Natura 2000 romangui protegida. L'esmentat Estat membre informarà la Comissió de les mesures compensatòries que hagi pres.

En cas que el lloc considerat albergui un tipus d'hàbitat natural i/o espècia prioritari, únicament es poden al·legar consideracions relacionades amb la salut humana i la seguretat pública, o relatives a conseqüències positives de primordial importància per al medi ambient, o bé, prèvia consulta a la Comissió, altres raons imperioses d'interès públic de primer ordre”.

4. Invalidesa d'una llicència d'activitat d'una instal·lació que genera immissions molestes

La sentència del TSJ de Galícia de 23 de desembre de 2009 (secció 2a., ponent: Carlos Pérez Keller) es pronuncia sobre la legalitat d'una llicència d'activitat d'un taller de fibra de vidre atorgada l'any 1997. L'activitat es trobava a escassos metres d'un habitatge, els inquilins de la qual es veien afectats per molèsties considerables en relació amb els sorolls, la contaminació atmosfèrica i les olors. El Tribunal anul·la la llicència i condemna l'Ajuntament d'Abegondo (A Coruña) a indemnitzar als demandants per raó dels danys i perjudicis causats.

Les Normes Subsidiàries aplicables al cas permeten els usos industrials compatibles amb l'habitatge en el sòl no urbanitzable de nucli rural. Les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament d'A Coruña, de 14 de maig de 1991, permeten els usos industrials d'aquest tipus de sòl, però amb la condició de què la distància a habitatges exteriors es fixi en cinquanta metres, que, en el cas present, no es compleix, ja que l'habitatge del recurrent es troba a uns trenta-sis metres. L'habitatge era previ a la sol·licitud de la posada en funcionament de l'activitat litigiosa. El Tribunal afirma, en relació amb això, que “(...) esta circunstancia ha de tenerse en cuenta a la hora de validar ulteriores solicitudes que pudieran entrar en colisión con ella” (F. 3º). D'altra banda, el Tribunal afirma que “podría, no obstante, pensarse que desde el momento en que las NN.SS. municipales no establecen distancia mínima a viviendas, este parámetro se deja a la aplicación ponderada caso por caso por parte de la Administración actuante, en función naturalmente de que la actividad sea compatible con vivienda, que es el referente plasmado en ellas; ello obliga a hacer un recorrido por las inspecciones efectuadas a la nave” (F. 4º).

El procés productiu es duia a terme a l'interior de la nau, però amb portes i finestres obertes, durant la jornada laboral, per permetre la circulació d'aire i l'assecament més ràpid de les peces. Això originava petites partícules i pols de fibra de vidre i provocava olors fortes a dissolvent i pintura, que es detectaven a l'exterior i, fins i tot, a l'interior de l'habitatge del demandant. La *Consellería de Medio Ambiente* va constatar que l'empresa no disposava de mesures correctores de cap mena per impedir l'emissió d'olors i pols a l'exterior, però, al mateix temps, va informar de la necessitat de què treballs d'aquesta naturalesa es realitzessin en recintes ventilats per impedir les concentracions perniciosos a l'interior, no només per a la salut dels treballadors, sinó

també per evitar riscos d'explosions. “*En realidad la actividad —apunta el Tribunal— parece encontrarse en un grave aprieto: por una parte ha de aislarse del exterior para preservar la inmunidad del uso de vivienda con el que es compatible; pero por otro, se ha de trabajar con puertas y ventanas abiertas para evitar situaciones de riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores*” (F. 5º).

En aquest sentit, El Tribunal estableix “*(...) que no es que haya abuso en la actividad por exceso en su ejercicio en relación a lo autorizado, sino que la propia licencia ha de entenderse viciada: se ha comprobado la insuficiencia de las medidas correctoras y no es que sean desviaciones de lo permitido en aquella (...)*”. Conclou que l'activitat presenta mancances de mesures per controlar les emissions d'olors, partícules i, fins i tot, sorolls, “*si bien de éstos se dice que no sobrepasarán lo establecido en la NBE-CA88 y en las Ordenanzas municipales*” (F. 5è).

El TSJ de Galícia conclou que “*la actividad objeto de la licencia en los términos en que ha sido autorizada ha de reputarse incompatible con vivienda, por lo cual, aún en el discutible supuesto de que no fuera aplicable la distancia establecida en las NN.CC.SS. provinciales, no podría entenderse acorde con las propias del municipio; parece que no habrá otro remedio que presentar otro proyecto que permita cohonestar por un lado la compatibilidad con el uso de vivienda, y por otro salvaguardar la seguridad interior de la nave; o en otro caso buscar otro emplazamiento que permita e[l] ejercicio de la actividad sin cortapisas urbanísticas*” (F. 6è).

Amb relació a la sol·licitud de danys i perjudicis que realitza la part demandant, el Tribunal resol el següent:

“*En orden a la traducción pecuniaria de los perjuicios indemnizables, es de significar que el montante económico en que se pueda ponderar el arrendamiento de otra vivienda no es un factor decisivo a la hora de calcular las indemnizaciones procedentes por inmisiones en la vivienda propia, máxime si lo que se pretende es acudir a los precios de mercado de una similar a la ocupada por los perjudicados, con el resultado de que ese importe variará en función de la calidad y tamaño de tal vivienda siendo así que las molestias, que es verdaderamente lo que hay en lo posible que reparar, son idénticas en caso de sufrirlas en una vivienda lujosa o en otra más modesta, ello aparte de que el informe aportado de una agencia inmobiliaria (...) no ofrece credibilidad suficiente al limitarse a consignar unas cifras sin mayor motivación ni indicación*”

de las fuentes consultadas. El criterio del alquiler podría adquirir relevancia, siempre en combinación con otros factores, cuando el perjudicado y su familia se hubieran visto obligados ante la gravedad de las agresiones a optar por ello, lo que no es el caso, en el que se ha de seguir la regla general de que lo indemnizable son las molestias sufridas en la residencia propia por las inmisiones acústicas y olfativas que a ella llegaron a consecuencia de la inmediación de la industria; en estas condiciones se trata de entidades inconmensurables y de difícil motivación en términos objetivos; no obstante, teniendo en cuenta la duración de las molestias, y una apreciación ponderada de sus intensidades y tiempos de emisión, parece que la cifra de diez mil euros resulta más adecuada que la establecida en la instancia, bien entendido que esa cantidad corresponde al tiempo transcurrido hasta el presente mes de diciembre inclusive, y que en lo sucesivo y hasta la finalización efectiva de las inmisiones se establece en doscientos cincuenta euros mensuales”.

5. Legalitat de les ordenances municipals sobre instal·lacions de telefonia mòbil

La sentència de 3 de desembre de 2009 (secció 2a., ponent: José María Arrojo Martínez) resol un recurs contenciós administratiu plantejat per Telefónica Móviles contra l'aprovació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament de les instal·lacions de telefonia mòbil personal i altres serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Valga. El Tribunal estima parcialment la demanda anul·lant alguns articles de l'ordenança referida.

La jurisprudència dels TSJ de les diferents comunitats autònomes acull plantejaments jurídics ben diferents sobre la legalitat de les ordenances municipals per a la instal·lacions d'instal·lacions de telefonia mòbil i, en conseqüència, sobre la competència dels ens locals en aquest àmbit. Com a mostra d'aquesta diversitat, esmentem la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de València de 29 de desembre de 2008⁷, la decisió i fonamentació jurídica de la qual contrasta amb la sentència que estem analitzant.

El Tribunal esmenta la doctrina del Tribunal Suprem (fonamentalment, la Sentència de 15 de desembre de 2003) per recordar que els ajuntaments tenen competència per

⁷ Vegeu la nota jurisprudencial de PERNAS GARCÍA, J. a *Actualidad Jurídica Ambiental* de 2 d'abril de 2009, www.actualidadjuridicaambiental.com.

establir condicions tècniques i jurídiques per aquest tipus d'instal·lacions, amb la finalitat d'evitar “(...) *la saturación, el desorden y el menoscabo del patrimonio histórico y del medio ambiente urbano que puede producirse*” (F. 2n.). Això no obstant, la jurisprudència del Suprem assenyalava que la competència municipal “(...) *no puede entrar en contradicción con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones*” (F. 2n.).

Després de la referència prèvia a la jurisprudència del Suprem, el mateix TSJ es manifesta sobre la competència municipal en aquest àmbit: “*Nada se puede cuestionar a la voluntad expresada de compatibilizar la funcionalidad de los elementos y equipos que requiere la instalación de un servicio de calidad con la preservación del paisaje urbano y natural, minimizando la ocupación y el impacto de su implantación. La protección del paisaje y la minimización del impacto visual encuentra su apoyo en la legislación medioambiental y urbanística, que constituye una materia estrechamente relacionada con la protección de los intereses municipales. En la medida que responde a esa voluntad de compatibilizar la calidad del servicio con la preservación del paisaje urbano y natural, tampoco merece crítica alguna*” (F. 2n.). El Tribunal acaba concluint que sembla fora de dubte que, per raons urbanístiques, ambientals, paisatgístiques o historicopatrimonials, els ajuntaments poden establir restriccions en relació amb l'establiment de les instal·lacions de telefonia mòbil (F. 4t.).

El Tribunal es pronuncia sobre diversos retrets d'il·legalitat plantejats per la part demandant. En primer lloc, el Tribunal (per remissió novament a la jurisprudència del Suprem) no aprecia incorrecció en l'exigència de l'ordenança de la prèvia aprovació d'un pla d'implantació per a aquestes activitats, en considerar que es produeix “ (...) *una adecuada compatibilización entre las razones urbanísticas, medioambientales y paisajísticas y las necesidades de las operadoras*”.

En segon terme, tampoc no troba vici d'invalidesa en l'obligació de què els operadors utilitzin la millor tecnologia disponible que sigui compatible amb la minimització de l'impacte visual i ambiental (F. 3r.). Així mateix i, en tercer lloc, considera adequades les previsions sobre les condicions d'ús compartit d'infraestructures per part de les diferents operadores, ja que entén que estan justificades per raons urbanístiques, ambientals o paisatgístiques (F. 6è.). “*Téngase en cuenta* —continua el Tribunal— *que procede que las Administraciones públicas fomenten la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de*

infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada, y que la aplicación del artículo 14 exigiría la necesaria motivación y justificación del caso concreto que se examine”.

En quart lloc, l'òrgan jurisdiccional analitza l'exigència de llicència urbanística i d'activitats classificades. La primera resta justificada per les previsions de la normativa de disciplina urbanística de Galícia. D'altra banda, la consideració de les instal·lacions de telefonia mòbil com a activitat classificada “(...) *corresponde a su naturaleza potencialmente peligrosa*”. El Tribunal justifica aquesta apreciació en la mateixa exposició de motius del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront les emissions radioelèctriques. El Tribunal resol aquesta qüestió amb força seny, sense entrar, com podem veure en altres sentències sobre la qüestió, en la complexa qüestió sobre l'existència d'indicis científics sobre els efectes sanitaris i ambientals d'aquestes activitats.

En cinquè lloc, no planteja problemes per al Tribunal l'obligació de revisió d'instal·lacions prevista en l'ordenança. Segons el seu criteri, això connecta amb l'exigència lògica, dintre del possible, de compatibilitat amb l'entorn per raons urbanístiques i ambientals. D'acord amb això, no sembla que constitueixi un excés normatiu (F. 8è).

En sisè lloc, “[l]a exigencia sobre acreditación de la concurrencia de las condiciones establecidas precisamente en la normativa sectorial, con el debido carácter de constatación funcional y de mantenimiento de dicha concurrencia y de su operatividad, no se presenta contraria a Derecho considerando el interés vinculado al ámbito competencial propio de la entidad local, interés que a su vez justifica la previsión de la disposición adicional sobre creación de registro municipal no advirtiéndose al respecto perjuicio alguno para la parte ni perturbación de competencias de otras Administraciones” (F. 9è).

Finalment, el Tribunal considera vàlida la fixació d'una taxa municipal per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, sense que aquest es pugui confondre amb el domini públic radioelèctric (F. 10è).

No obstant, el Tribunal entén que l'ordenança no pot establir prohibicions o distàncies

addicionals de protecció per raons exclusivament de salut. Citant una sentència prèvia del mateix TSJ de Galícia (sentència 4708/2002, de 26 de maig de 2005), afirma que “[L]os Ayuntamientos pueden exigir, en ejercicio de sus competencias en materia de salud, que se cumplan los requisitos determinados en esta normativa [la regulación estatal que establece condiciones sanitarias a estas instalaciones⁸], pero no establecer ellos esos requisitos” (F. 4t.). El Tribunal anul·la l’annex de l’ordenança que establia aquests requisits i condicions tècniques. El TSJ de Galícia també anul·la les disposicions de l’ordenança relatives a l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil (F. 5è) i a l’exigència de responsabilitat solidària en matèria sancionadora (F. 11è).

⁸ Concretament el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront les emissions radioelèctriques.